

Magangué, Bolívar 14 de Mayo de 2024

**SEÑOR JUEZ**

**E.S.D.**

**ASUNTO:** ACCIÓN DE TUTELA PARA OBTENER LA PROTECCIÓN DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICIÓN, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, A LA SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL, LOS CUALES CONSIDERÓ VULNERADOS POR, SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR, INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ARIAS, GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL QUIENES NO HAN REALIZADO, LOS ESTUDIOS DE CALIFICACIÓN PERTINENTE PARA PENSIÓN.

**ACCIONANTE:** ELIDA DEL CARMEN MORENO MARTINEZ [REDACTED]

**ACCIONADOS:** SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR, INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ARIAS, GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

**ELIDA DEL CARMEN MORENO MARTINEZ**, identificado(a) con CÉDULA NÚMERO 33.198.990 Actuando en mi propio nombre, con todo respeto manifiesto a usted que en ejercicio del derecho de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, por medio del presente escrito formulo acción de tutela contra las entidades: **SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR, INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ARIAS, GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**, a fin de que se le ordene dentro en un plazo prudencial perentorio, el amparo de mis derechos fundamentales, sea resuelta mi solicitud formulada a dichas instituciones.

#### **HECHOS**

1. Mediante el contrato de trabajo de fecha 01 de febrero de 1987. desempeñe el cargo de docente en el colegio la Paz, en Magangué Bolívar
2. Mediante el contrato de fecha 15 de febrero de 1988, desempeñe el cargo de docente en la escuela mixta de Versailles en Magangué Bolívar
3. Mediante el certificado laboral, demuestro que trabaje en el cargo de docente en la escuela municipal santa Cecilia en Magangué Bolívar, en el año 1989.
4. Mediante certificación laboral demuestro que trabaje en el cargo de docente en La escuela mixta municipal maracaná en Magangué Bolívar desde el 04 de julio hasta el 30 de noviembre del 2000.

5. Soy nombrada en el año 2000 por la secretaria de educación y cultura de Magangué Bolívar, reconocido en el DECRETO N° 017 DEL 23 DE FEBRERO DE 2002 laborando con el cargo de secretaria hasta el año 2004 y posteriormente, en el cargo de docente de aula mediante. DECRETO N°560 DEL 14 DE JUNIO DEL 2005 - DECRETO N°521 DEL 25 DE ENERO DEL 2006
6. En el año 2007, me diagnosticaron como patología oncológica (CA DE OVARIOS), debido a esto, mientras recibía tratamiento, no presente la incapacidades porque en común acuerdo con el rector de ese entonces envié un remplazo durante 3 meses que de mi salario pagaba hasta que cumplí con el ciclo del tratamiento de quimioterapias
7. Mediante el DECRETO 0035 DE 28 DE ENERO DE 2009 me encontraba laborando en el colegio san mateo en Magangué Bolívar y me trasladan al colegio san José N° 1 para hacerle la licencia al profesor ALVARODE JESUS GUTIERREZ MUÑOZ
8. En el año 2010 no labore por que no me dieron contrato.
9. En el año 2011 me envían al colegio institución técnica agropecuaria santa Bárbara en el corregimiento barranco de yuca donde no tuve decreto si no una orden de reubicación N° TH11-007 de la secretaria de educación y cultura de Magangué. en este colegio trabaje con esa orden hasta el año 2016
10. En el 2016 me solicitaron de medicina laboral en Cartagena donde exprese que mi medio de transporte para el colegio era la motocicleta donde en varias ocasiones sufrí caídas por lo que medicina laboral ordeno que fuera trasladada a un colegio dentro del casco urbano.
11. Mediante el decreto N°0412 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 soy trasladada al colegio nuestra señora de Fátima en Magangué Bolívar hasta el año 2021
12. Mediante la RESOLUCION N°4369 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, me trasladan al colegio institución educativa de juan arias hasta el 15 de enero de 2024
13. A la fecha de la terminación del nombramiento la señora ELIDA DEL CARMEN MORENO MARTINEZ contaba con 59 años de edad, y según el reporte de semanas cotizadas en COLPENSIONES llevaba cotizadas 1249 semanas, es decir le faltaban menos de tres (03) años para pensionarse.
14. No obstante, en ese momento la señora ELIDA DEL CARMEN MORENO MARTINEZ se encontraba adelantando ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

### **DERECHO FUNDAMENTAL VIOLADO**

- ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, A LA SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL Y AL TRABAJO.

La jurisprudencia constitucional ha usado de forma dominante la expresión “estabilidad laboral reforzada” para hacer alusión al derecho fundamental antes caracterizado. En nuestro medio jurídico, la locución ‘laboral’ se asocia legislativamente a las relaciones de trabajo dependiente,

caracterizadas por la prestación de servicios personales bajo subordinación jerárquica. No obstante, esta Corte ha señalado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada aplica no solo a quienes tienen un vínculo de trabajo dependiente estrictamente subordinado y sujeto al derecho laboral, sino también a quienes están insertos en relaciones ocupacionales divergentes, originadas por ejemplo en un contrato de prestación de servicios o en un contrato de aprendizaje. En efecto, desde la sentencia T-1210 de 2008 la Corte ha sostenido que “aún en el seno del contrato de prestación de servicios, puede predicarse ciertas garantías de la que gozan las relaciones laborales, al cobrar importancia los principios de estabilidad laboral a ciertos sujetos”. [67] Luego esta posición se ha reiterado en distintas ocasiones, como por ejemplo en las sentencias T-490 de 2010, [68] T-988 de 2012, [69] T-144 de 2014 [70] y T-310 de 2015. [71] En la sentencia T-040 de 2016, la Sala Tercera de Revisión de la Corte tuteló el derecho a la estabilidad reforzada de una persona a quien se le terminó sin causa justificable y sin autorización de la oficina del Trabajo su contrato de prestación de servicios, mientras estaba en condiciones de debilidad manifiesta. Sostuvo entonces que “la estabilidad laboral reforzada para personas en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud aplica a todas las alternativas productivas, incluyendo al contrato de prestación de servicios”. [72]

### **PROCEDENCIA Y LEGITIMIDAD**

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario. El principio de subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es procedente siempre que (i) no exista un medio alternativo de defensa judicial; o (ii) aunque exista, este no sea idóneo y eficaz en las condiciones del caso concreto; o

(iii) sea necesaria la intervención del juez constitucional para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio irremediable en los derechos constitucionales. Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable [76] deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un perjuicio grave, (iii) que sea necesaria la adopción de medidas urgentes, y (iv) que las mismas sean impostergables.

Con todo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, el examen de procedencia de la acción tutela debe tomar en cuenta las dificultades específicas que podrían enfrentar para acceder a la justicia sujetos de especial protección constitucional cuando están comprometidos derechos fundamentales, como sería el caso de las personas en estado de debilidad manifiesta debido al deterioro de su salud o que están en situación de discapacidad. Lo anterior, porque en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, el Estado debe garantizar a estas personas un tratamiento diferencial positivo, pues en estos casos el accionante experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial [77].

2.2.2. Respecto de las acciones interpuestas para obtener el reintegro de un trabajador, la Corte ha resaltado que, en principio, la tutela no es la vía judicial idónea para resolver este tipo de controversias al existir los mecanismos establecidos en la jurisdicción ordinaria laboral o la

contencioso administrativa, atendiendo a la forma de vinculación del interesado[78]. Sin embargo, también ha destacado que el examen de procedencia debe ser menos estricto cuando se encuentran comprometidos los derechos de sujetos de especial protección constitucional o de personas que se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta, “pues en estos casos el actor experimenta una dificultad

objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[79].

En efecto, en la Sentencia T-151 de 2017[80] se indicó que “la acción de tutela no es la vía judicial idónea, dado que existe una jurisdicción especializada, que en los últimos años ha sido fortalecida con la implementación del sistema de oralidad introducido con la Ley 1149 de 2007. No obstante, [...] de manera excepcional, la jurisprudencia de este Tribunal ha contemplado la viabilidad del amparo constitucional para obtener el reintegro de un trabajador, en aquellos casos en que se encuentra inmerso en una situación de debilidad manifiesta, con la capacidad necesaria de impactar en la realización de sus derechos al mínimo vital o a la vida digna. En este escenario, la situación particular que rodea al peticionario impide que la controversia sea resuelta por las vías ordinarias, requiriendo de la procedencia de la acción de tutela, ya sea para brindar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en su contra”[81].

Además se precisó que circunstancias como (i) la edad del sujeto, (ii) su desocupación laboral, (iii) el hecho de no percibir ingreso alguno que permita la subsistencia de su familia y la propia, y (iv) la condición médica padecida, son supuestos representativos de un estado de debilidad manifiesta (art. 13 superior)[82].

En igual sentido, en la Sentencia T-442 de 2017[83] se consideró que “en los eventos en los que las circunstancias particulares del caso constituyen un factor determinante, es posible que la acción de tutela pase a otorgar directamente el amparo pretendido, ya sea de manera transitoria o definitiva, a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección a los que sea posible acudir”.

En la Sentencia T-317 de 2017[84] se destacó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que “en aquellos casos en los que el accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y sea desvinculado

de su empleo sin autorización de la oficina del trabajo o del juez constitucional, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo de protección principal”.

Aplicando los anteriores precedentes, en la Sentencia T-041 de 2019[85] la Sala Octava de Revisión concluyó que “si bien el ordenamiento jurídico previó procedimientos judiciales especiales para ventilar pretensiones laborales, la Corte ha entendido que las reglas relativas a la procedencia de la acción tendrán que ser matizadas cuando se trata de personas en

especial condición de vulnerabilidad o en circunstancias de debilidad manifiesta, como consecuencia, entre otros, de su estado de salud; por lo tanto, la tutela debe ser considerada como el mecanismo más adecuado para adoptar las acciones que permitan conjurar la afectación de los derechos en cuestión”[86].

2.2.3. En los casos concretos que se estudian, la Sala identifica que las peticiones están orientadas a que se declare la ineficacia de las terminaciones de los contratos laborales por obra o labor determinada por no contar con la autorización del Ministerio del Trabajo y, consecuentemente, a que se ordene los reintegros a los cargos que ocupaban los accionantes o a otros que se encuentren en igualdad de condiciones, más el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir en el interregno de la desvinculación hasta que se verifique su efectivo reintegro, y la indemnización correspondiente a ciento ochenta días de salario por omitir el trámite de autorización del despido ante el Ministerio del Trabajo.

Para tramitar esas pretensiones el ordenamiento prevé en abstracto otro medio de defensa judicial susceptible de instaurarse ante la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral[87]. No obstante, este Tribunal ha aceptado la procedencia de la acción de tutela en casos excepcionales[88], por ejemplo, cuando la parte activa es una persona en circunstancias de debilidad manifiesta o un sujeto de especial protección constitucional, que considera lesionados sus derechos fundamentales con ocasión de la terminación de su relación laboral, y cuando el goce efectivo de su derecho al mínimo vital o a la salud se ve obstruido.

Corresponde, entonces, a la Sala determinar si en casos como los presentes procede la tutela de manera excepcional no solo por la afectación o amenaza del derecho fundamental al mínimo vital sino de otros como el derecho a la salud. A continuación, se realizará el estudio del cumplimiento del requisito de subsidiaridad en cada caso concreto. Ya en el acápite dedicado al estudio de fondo, se pronunciará acerca de las pretensiones de las solicitudes de amparo.

2.2.4. Según las pruebas obrantes en el expediente T-7.441.401, María Angélica Cardona Rugeles, de 53 años[89], derivaba su único sustento económico de la relación laboral sostenida con Servimos Integral SAS, en donde devengaba un salario mínimo mensual legal vigente más el auxilio de transporte[90], hasta que su contrato de trabajo por obra o labor determinada fue terminado el 14 de diciembre de 2018, sin tener en cuenta que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta en razón del deterioro de su salud, pues había una opinión médica que refería “Cambios degenerativos discales desde L2 hasta S1 y cambios degenerativos facetarios en L4-L5 y L5-S1 con el compromiso del canal raquídeo y foramidal mencionado en cada nivel”[91] que estaban siendo tratados con analgesia para el dolor y terapias físicas[92], y que derivó en varias incapacidades conocidas por el empleador[93]. Esta situación la puso en una condición de desprotección al no contar con los ingresos necesarios para sufragar sus

gastos personales, además de algunos médicos derivados del tratamiento por medicina general y medicina del dolor que ya había iniciado.

### **PINCIPIO DE INMEDIATEZ, DEBILIDAD MANIFIESTA Y DAÑO IRREMEDIABLE**

Así, uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la inmediatez. Ello significa que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia.

La inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela que permite cumplir con el propósito de la protección inmediata y por tanto efectiva de los derechos fundamentales, cuando estos resulten afectados por la acción u omisión de autoridades públicas o de los particulares en los eventos establecidos en la ley. Igualmente ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en advertir que no cualquier tardanza en la presentación de las acciones de tutela acarrea su improcedencia, sino sólo aquella que pueda juzgarse como injustificada o irrazonable, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, pues en algunos un año puede ser muy amplio y en otros eventos puede ser un plazo razonable.

Quien contrata la prestación de un servicio personal –con o sin subordinación- debe tener presente que adquiere con la persona que se lo presta una relación relevante a la luz de la Constitución, pues adquiere el deber de actuar con solidaridad cuando las circunstancias se lo requieran, y sus relaciones deben entonces trascender el principio de utilidad que en general es válido observar en los actos contractuales que desarrolle, y en las relaciones patrimoniales de disposición de sus bienes económicos. Una persona en condiciones de salud que interfieran en el desempeño regular de sus funciones se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta no solo porque esto puede exponerla a perder su vínculo, como lo muestra la experiencia relacionada en la jurisprudencia constitucional, sino además porque le dificulta la consecución de una nueva ocupación con base en sus facultades, talentos y capacidades humanas, que le depare los bienes suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual está en riesgo no solo su estabilidad y su dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su seguridad social. En la sentencia T-1040 de 2001, una de las primeras sobre la materia, se dijo:

“La construcción de la solidaridad humana y no la competencia mal entendida por sobrevivir, es el principio de razón suficiente del artículo 95 de la Carta Política y por ello, en lugar de rechazar a quien está en situación ostensible de debilidad, es deber positivo de todo ciudadano - impuesto categóricamente por la Constitución- el de socorrer a quien padece la necesidad, con medidas humanitarias. La acción humanitaria es aquella que desde tiempos antiquísimos inspiraba a las religiones y a las sociedades filantrópicas hacia la compasión y se traducían en medidas efectivas de socorro, que hoy recoge el derecho internacional humanitario.

En el caso sub-judice, lo solidario, lo humanitario, lo respetuoso de los derechos fundamentales implicados era, se insiste, mantener al trabajador en su cargo o trasladarlo a otro similar que implicara menos riesgo hipotético”

4.10. Por lo anterior, la Corte Constitucional considera que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de limitar a quienes tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario, sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta, evaluadas conforme a los criterios antes indicados y desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Ahora bien, resta por preguntarse si esta protección se prodiga no solo en virtud de la Constitución, sino que implica incluso la posibilidad de aplicar las prestaciones estatuidas en la Ley 361 de 1997.

### **AUSENCIA DE PARALELISMO DE ACCIÓN**

De conformidad con los Artículos 37 y 38 del Decreto 2591/91 manifiesto bajo gravedad de juramento que no he presentado otra Acción de Tutela respecto de los mismos Hechos y Derechos.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Fundamento mi solicitud según lo establecido en los artículos Art. 23 y 86 de la Constitución Política de Colombia y Decretos Reglamentarios 2591 de 1991, 306 de 1992 y D. L. 1382/2000; Art. 6° del C.C.A.; Decreto

2150 de 1995, art. 10.

### **PRETENSIONES**

1. Solicito respetuosamente se ordene el reintegro sin solución de continuidad a la secretaria de educación de o a quien corresponda.
2. Que se condene al pago a los dineros dejados de percibir desde el momento de la desvinculación hasta la fecha.
3. Solicito el pago de las incapacidades laborales temporales a las que tenga derecho.
4. Solicito la protección a mi derecho a la estabilidad laboral reforzada por fuero a la salud, solicito el reintegro inmediato a mi eps porque tengo tratamientos y no los puedo dejar de continuar.
5. Se ordene a los accionados(a), que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Sentencia produzcan la(s) respuesta(s) de forma y de fondo a cada pretensión expresada.

### **PRUEBAS**

1. CEDULA DE CIUDADANIA
2. HISTORIAS CLINICAS

### **ANEXOS**

Anexo a la presente tutela los siguientes documentos:

- Copia de la historia clínica
- Copia de mi historia laboral
- Certificados desde el año 2005 hasta el año 2024
- 3 contestaciones a 3 peticiones de estabilidad laboral por tiempo de servicio y enfermedad catastrófica
- DECRETO 587 DEL 2023 donde se da por terminado mi nombramiento provisional como docente en el colegio institución educativa juan arias

### NOTIFICACIONES

Las entidades accionadas, puede ser notificada en:

- SECRETARIA DE EDUCACION DE BOLIVAR,  
[Notificaciones@bolivar.gov.co](mailto:Notificaciones@bolivar.gov.co)
- INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ARIAS  
[iejuanarias@gmail.com](mailto:iejuanarias@gmail.com)
- GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
[Tutelasgobernacion@bolivar.gov.co](mailto:Tutelasgobernacion@bolivar.gov.co)
- COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
[notificacionesjudiciales@cnscc.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cnscc.gov.co)

La parte accionante:

[REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ATENTAMENTE

**ELIDA DEL CARMEN MORENO MARTINEZ**

[REDACTED]